
El desvanecimiento de la ilusión liberal

El regreso de la competencia entre
potencias y las nuevas esferas de influencia

General Víctor Bados Nieto

Durante buena parte de las últimas décadas, el mundo occidental vivió instalado en la ilusión de que la historia avanzaría, casi por inercia, hacia una comunidad internacional más abierta, más integrada y más pacífica. Tras el final de la Guerra Fría, la implosión de la Unión Soviética y la breve hegemonía unipolar de la *pax americana*, se extendió la idea de que la competición estratégica entre grandes potencias había quedado relegada al pasado. La democracia liberal, economía de mercado, globalización e instituciones multilaterales parecían constituir el horizonte natural de la humanidad.

Vuelta al estado de naturaleza hobbesiano

La conocida tesis de Francis Fukuyama sobre el «fin de la historia» expresaba bien aquel clima intelectual. No anunciaba el fin de los conflictos, pero sugería con entusiasmo que la gran disputa ideológica sobre la forma legítima de organización política se había

resuelto a favor de la democracia liberal y la economía de mercado. Junto a esa intuición aparecía también la figura del último hombre, satisfecho, consumidor, despolitizado y convencido de habitar un orden casi definitivo.

Aquel optimismo impregnó durante años el pensamiento estratégico occidental, sobre todo en Europa, donde los dividendos de la paz favorecieron una desmilitarización tanto material como mental. Se pensó que Rusia, debilitada tras el colapso soviético, acabaría incorporándose, con mayor o menor dificultad, al mundo de las democracias liberales. También se dio por supuesto que China, integrada en el capitalismo global mediante las reformas de Deng Xiaoping y su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001, evolucionaría gradualmente hacia formas de apertura política. La premisa parecía razonable. La liberalización económica, el crecimiento de las clases medias, el consumo, la exposición a los flujos globales y la integración en las cadenas de valor terminarían generando una transformación política interna.

Sin embargo, la historia rara vez se ajusta a los deseos de quienes creen haber descifrado su dirección. Rusia no se convirtió en una democracia liberal consolidada, sino en una potencia cada vez más revisionista, movida por una narrativa de humillación, pérdida y agravio. China no se liberalizó políticamente, sino que utilizó el mercado, la globalización y las instituciones económicas internacionales para fortalecer al Estado y al Partido Comunista. Y Estados Unidos, lejos de consolidar sin fisuras una hegemonía liberal responsable, ha mostrado en distintos momentos una relación más selectiva, unilateral o transaccional con las normas que él mismo contribuyó decisivamente a construir.

La guerra regresaría a Europa en los años noventa con los conflictos balcánicos, después reapareció, tras el 11-S, bajo la forma de la guerra global contra el terrorismo islámico, y volvió con toda su crudeza interestatal mediante la invasión rusa de

Ucrania. Al mismo tiempo, Oriente Medio ha seguido mostrando la fragilidad de sus equilibrios, el Sahel refleja la erosión de la presencia occidental y la economía global se ha convertido en un espacio de coerción, sanciones, rivalidad tecnológica y competencia estratégica. La globalización no ha desaparecido, pero ha dejado de ser políticamente inocente. Lo que antes se presentaba como interdependencia beneficiosa se percibe hoy también como dependencia, vulnerabilidad y riesgo. Y mientras tanto, el orden internacional, se desvanece.

El orden internacional basado en reglas

Conviene, antes de analizar la crisis del sistema internacional, precisar qué entendemos por orden internacional basado en reglas. No se trata de un mundo puro ni neutral, sino de un entramado histórico de normas, instituciones, prácticas y equilibrios de poder que ha intentado ordenar la convivencia entre Estados. El sistema internacional carece de un gobierno mundial. A diferencia del orden interno, donde el Estado monopoliza legítimamente la coerción, el espacio internacional está compuesto por unidades soberanas, estados nación que conviven, comercian, se alían, compiten y, llegado el caso, guerrear. Es un sistema anárquico no porque sea necesariamente caótico, sino porque como postula Hedley Bull, no existe una autoridad superior plenamente efectiva capaz de imponer siempre las reglas.

El orden internacional ha intentado introducir cierta estabilidad en esa anarquía. Su punto de partida convencional suele situarse en la Paz de Westfalia de 1648, con la soberanía territorial, la igualdad jurídica formal de los Estados y la no injerencia como principios rectores. Tras el fracaso de la Sociedad de Naciones y la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se levantó un

orden más institucionalizado y universal. La Carta de Naciones Unidas consagró la igualdad soberana de los Estados y prohibió, como principio general, el uso de la fuerza, salvo en dos supuestos. La legítima defensa y la autorización expresa del Consejo de Seguridad.

A ese edificio político se añadió la arquitectura económica de Bretton Woods, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y más tarde la estructura comercial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La idea de fondo era que la interdependencia económica, sometida a reglas, reduciría la tentación de la guerra al multiplicar los intereses compartidos. De este modo Bretton Woods estabilizaba la economía mundial, pero consolidaba también la centralidad del dólar. El orden de posguerra incorporó además una dimensión moral y jurídica inédita con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Convenios de Ginebra de 1949, que trataron de afirmar que la dignidad de la persona y los límites a la guerra no dependían únicamente de la voluntad soberana de los Estados.

Ese orden, sin embargo, nunca fue plenamente universal, ni neutral. Nació bajo hegemonía occidental y, de manera muy particular, bajo liderazgo estadounidense. El Consejo de Seguridad consagró la desigualdad entre grandes potencias mediante el derecho de veto. Los derechos humanos adquirieron vocación universal, aunque su aplicación fue muchas veces selectiva. Y el derecho internacional humanitario proclamó límites a la guerra que han sido vulnerados con excesiva frecuencia en numerosos conflictos.

La crisis actual procede, en buena medida, de esa contradicción. Las reglas siguen existiendo, pero en ocasiones se aplican de forma desigual. Las instituciones permanecen, pero con frecuencia quedan bloqueadas o desbordadas. El derecho internacional continúa siendo invocado por todos, aunque con reincidencia queda atrapado entre la selectividad de unos, el revisionismo de

otros y la impotencia de quienes carecen de capacidad suficiente para hacerlo cumplir. Ante la ausencia de un Leviatán como poder soberano, global e imparcial, el orden internacional depende de una mezcla siempre inestable de legitimidad, equilibrio de poder y voluntad política.

Rusia, China y EE.UU. Tres potencias revisionistas escudadas en el victimismo

Desde ahí puede entenderse mejor la actitud de tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, ante el *statu quo* internacional. No conviene equipararlas moralmente ni atribuirles la misma responsabilidad. Sus revisionismos son distintos en naturaleza, método e intensidad.

Rusia representa quizá el caso más visible de resentimiento estratégico. Su política exterior posterior a la implosión soviética no puede entenderse sólo como cálculo frío de intereses, sino también a través de una narrativa de pérdida, humillación y reparación. Moscú se contempla a sí misma como una gran potencia degradada, obligada durante los años noventa a aceptar reglas escritas por otros en el momento de su máxima debilidad.

De ahí nace una de las claves de su comportamiento internacional. El recurso al principio del *tu quoque*, es decir, «no me acuses de aquello que tú mismo has hecho». No constituye una justificación jurídica, pero sí funciona como coartada política. Rusia responde a las acusaciones occidentales de violar el derecho internacional recordando Kosovo, Irak, la ampliación de la OTAN, el abandono unilateral de tratados estratégicos o la instrumentalización de la fuerza cuando los intereses occidentales lo han exigido.

El primer gran agravio ruso se vincula a las negociaciones sobre la reunificación alemana en 1990 y al debate posterior sobre

la ampliación de la OTAN. Moscú sostiene que Occidente transmitió la idea de que la Alianza no avanzaría hacia el Este si la URSS aceptaba la permanencia de una Alemania reunificada dentro de la OTAN. Al margen de la discusión documental sobre aquellas conversaciones, lo cierto es que la retirada soviética de Europa central y oriental fue seguida por la expansión progresiva de la Alianza Atlántica hacia las fronteras rusas. Para Polonia, Hungría, la República Checa, las repúblicas bálticas y otros países de la región, aquello significaba regresar a Occidente y protegerse de una Rusia históricamente temida. Para Moscú, en cambio, se percibió como el estrechamiento irreversible de su cinturón de seguridad que considera imprescindible desde la perspectiva de una geografía desfavorable en el Oeste, sin obstáculos naturales, sólo llanuras, y por donde le llegaron las principales invasiones a lo largo de la historia.

La guerra de Kosovo, en 1999, agravó esa herida. Rusia vio en la intervención de la OTAN contra Serbia una humillación estratégica y una vulneración del orden jurídico al no existir autorización expresa del Consejo de Seguridad. Después, la retirada estadounidense del Tratado ABM, la independencia de Kosovo en 2008, la Cumbre de Bucarest de la OTAN –en la que se afirmó que Ucrania y Georgia serían miembros de la Alianza– y la guerra de Georgia fueron acumulando una secuencia de agravios y respuestas. La anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 convirtieron esa narrativa en revisionismo armado. La lógica rusa parece clara. Si Occidente vulnera reglas cuando lo considera necesario, Rusia se reserva el derecho a hacer lo mismo en su espacio de seguridad. Ésa es la fuerza política del *tu quoque*, aunque no pueda servir jamás como exculpación jurídica ni moral de una agresión.

China articula su revisionismo desde el de una civilización que se considera desposeída de su lugar natural en el mundo. La China

de Xi Jinping no se presenta como una potencia que emerge, sino como un Estado-civilización que regresa. Su ascenso se narra internamente menos como conquista que como restauración.

El núcleo simbólico de esa restauración es el llamado «siglo de las humillaciones», que la narrativa china sitúa entre la Primera Guerra del Opio y la victoria comunista de 1949. Durante ese periodo, China sufrió la intrusión de potencias extranjeras, tratados desiguales, cesiones territoriales, indemnizaciones, la pérdida de Hong Kong, la presión rusa al norte del Amur, el saqueo de Pekín y del Palacio de Verano, y finalmente la invasión japonesa de Manchuria. El Partido Comunista Chino ha construido buena parte de su legitimidad sobre la promesa esencial de que China no volvería a ser humillada.

Por ello, soberanía, integridad territorial, memoria nacional y poder estatal son conceptos inseparables. Taiwán, Hong Kong, Xinjiang, el Tíbet, el Mar Meridional de China o las disputas marítimas con Japón forman parte de un mismo relato. El impedir que fuerzas extranjeras vuelvan a fragmentar el cuerpo histórico de China, concebida por su dirigencia como una civilización de continuidad milenaria.

Paradójicamente, la re inserción china en el orden mundial contemporáneo comenzó mediante una maniobra occidental. La visita de Nixon a Pekín en 1972, impulsada por la arquitectura estratégica de Kissinger, buscó aprovechar la ruptura sino-soviética y convertir a China en contrapeso de la URSS. A partir de Deng Xiaoping, China abrazó los mecanismos del capitalismo, la inversión extranjera, la exportación manufacturera y el mercado mundial, pero sin abandonar el monopolio político del Partido Comunista. Deng no occidentalizó China, sino que la hizo compatible con la globalización sin hacerla liberal.

El error de Occidente de creer que la apertura económica acabaría produciendo apertura política, no tuvo en cuenta el cálculo

de Pekín. El mercado podía fortalecer al Estado, no disolverlo. La entrada en la OMC aceleró su conversión en gran fábrica del mundo. La crisis financiera de 2008, los Juegos Olímpicos de Pekín y la creciente dependencia occidental de las cadenas de suministro chinas reforzaron la percepción de un cambio de jerarquías. China se había beneficiado de la globalización diseñada por Occidente, pero la había utilizado para acumular poder nacional.

Con Xi Jinping, esa ambición adquirió forma geoeconómica mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Puertos, ferrocarriles, corredores energéticos, redes digitales, financiación, empresas estatales y estándares tecnológicos proporcionan a Pekín una proyección global destinada a conectar Eurasia, África, Oriente Medio y América Latina con el centro chino. China no se presenta en ese marco como conquistadora, sino como constructora de conectividad, desarrollo y modernización.

La dimensión marítima es esencial. China depende de rutas oceánicas vulnerables, en particular del estrecho de Malaca, y se percibe contenida por cadenas de islas y alianzas bajo influencia estadounidense. De ahí su interés por corredores alternativos, puertos estratégicos y puntos de apoyo en el Índico, desde Gwadar hasta Yibuti. En el Mar Meridional de China, la línea de los nueve trazos, la construcción de islas artificiales y la militarización de arrecifes expresan su voluntad de transformar espacios disputados en posiciones de control estratégico. Taiwán constituye el punto más sensible para Pekín pues no es un asunto internacional ordinario, sino la pieza pendiente de la reunificación nacional y una cuestión existencial de soberanía.

Así se entiende la creciente asertividad china. Memoria de humillación, crecimiento económico, nacionalismo político, vulnerabilidad marítima y ambición tecnológica convergen en una misma dirección. A diferencia de Rusia, China no ha optado por

una guerra frontal contra el orden vigente. Su método es más paciente y acumulativo. Pero ambas comparten una idea. Rechazar que Estados Unidos conserve indefinidamente el monopolio de interpretación del orden internacional.

Estados Unidos, por su parte, no está en declive en el sentido simple de desaparición de poder. Sigue siendo la primera potencia militar del planeta, el centro del sistema financiero internacional, el emisor de la moneda de reserva global, el vértice de la red de alianzas más extensa del mundo y uno de los grandes polos de innovación tecnológica. Su declive es más sutil. Pérdida de legitimidad, de *autoritas*, de capacidad para presentarse como hegemón liberal responsable.

Durante décadas, la hegemonía estadounidense combinó poder duro y promesa normativa. Estados Unidos no sólo contenía adversarios; también ofrecía un relato. Se presentaba como garante de la libertad de navegación, del comercio abierto, de la democracia liberal, de los derechos humanos y de la seguridad colectiva. Esa imagen siempre tuvo contradicciones, pero funcionaba porque buena parte del mundo consideraba que el liderazgo estadounidense proporcionaba más orden que desorden.

Kosovo en 1999 abrió una primera grieta. Si para Occidente fue una excepción humanitaria; para Rusia, China y otros actores, constituía un precedente de acción al margen del Consejo de Seguridad, que se sorteaba cuando no convenía a Occidente. Afganistán, tras el 11-S, se justificó en la legítima defensa frente a Al Qaeda y el régimen talibán, pero inauguró una guerra global contra el terrorismo, sin fronteras claras ni final preciso. Irak, en 2003, dañó aún más la legitimidad estadounidense: las armas de destrucción masiva no aparecieron, la base jurídica resultó insuficiente para buena parte de la comunidad internacional y Abu Ghraib, Guantánamo y las detenciones extraordinarias asociaron

al país que encarnaba el Estado de derecho con zonas grises de excepcionalidad jurídica.

La crisis financiera de 2008 añadió una dimensión económica a esa pérdida de *autoritas* y de poder blando. El modelo estadounidense, presentado durante décadas como paradigma de eficiencia e innovación, quedó asociado a la desregulación, los excesos financieros y el rescate público de pérdidas privadas. Libia y Siria marcaron nuevas fisuras. En Libia, una resolución concebida para proteger civiles terminó asociándose al cambio de régimen; en Siria, el retraimiento estadounidense dejó espacio a Rusia, Irán, Turquía y actores no estatales. El abandono de Afganistán en 2021 condensó visualmente esa pérdida de autoridad. Para los aliados sembró dudas sobre la fiabilidad estadounidense mientras que para los adversarios confirmó que Washington podía cansarse.

Sobre ese trasfondo emerge de nuevo Donald Trump y el movimiento MAGA. Su promesa consiste en revertir el declive estadounidense a partir de la idea de que el mundo se ha beneficiado de la benevolencia norteamericana sin aportar suficientes retornos tangibles. Las instituciones internacionales son útiles sólo si sirven al interés norteamericano. La paradoja es que, al intentar corregir ese desequilibrio desde una lógica puramente transaccional, se erosiona el propio orden internacional que multiplicó el poder estadounidense. Las alianzas dejan de presentarse como comunidades de valores y pasan a concebirse como contratos revisables. El hegemón responsable empieza a ser percibido como un proveedor de protección que cobra, amenaza o condiciona su respaldo.

*Hacia un nuevo orden. Las esferas de influencia.
El papel de Europa y de España*

Reconocer esa erosión no exige caer en una equidistancia simplificadora. Estados Unidos ha sido, es y debe seguir siendo un aliado

esencial de Europa. No sólo por interés estratégico, sino porque las alianzas duraderas descansan también sobre principios compartidos de democracia representativa, Estado de derecho, libertad individual, economía abierta y defensa de sociedades plurales frente a los autoritarismos. Hay en la tradición norteamericana una dimensión aspiracional –la ciudad sobre la colina de John Winthrop– que no debería olvidarse. Precisamente por eso, la crítica al repliegue transaccional de Washington no nace del antiamericanismo, sino de la preocupación contraria: que Estados Unidos abandone aquello que hizo de su hegemonía algo más que predominio material.

El mundo que emerge no es ya el de la ilusión liberal de los años noventa, pero tampoco una simple reedición de la Guerra Fría. Es un escenario más fluido, competitivo e incierto, en el que tres grandes potencias muestran, cada una a su modo, rasgos revisionistas.

Rusia, actuando desde el agravio, practica un revisionismo revanchista que aspira a reconstruir una esfera de influencia en el espacio postsoviético, y, cada vez más, desde la fuerza. China, desde un victimismo histórico, lo hace desde la acumulación paciente de poder y la reivindicación civilizatoria, sin pretender destruir de inmediato el orden internacional, sino reformulándolo para que refleje mejor su peso y sus intereses. Estados Unidos, encarna un revisionismo defensivo o correctivo por su parte, reinterpretando el orden que ayudó a crear cuando percibe que éste limita su primacía. Busca adaptarlo, endurecerlo o sortearlo cuando considera que ya no protege suficientemente su primacía hegemónica.

En ese contexto reaparece la lógica de las esferas de influencia. No es una novedad. La política internacional ha convivido históricamente con áreas de predominio, zonas de seguridad, espacios de influencia y jerarquías regionales. Carl Schmitt teorizó, desde

una perspectiva profundamente discutible y marcada por su tiempo, la idea de los *Großräume* o grandes espacios en el sentido de ámbitos regionales organizados en torno a potencias rectoras, alrededor de las cuales otros Estados quedarían integrados en relaciones de tutela, dependencia o subordinación.

Rusia intenta hacerlo en su vecindad postsoviética, incluida Europa oriental. China, en el Indo-Pacífico, Taiwán y el Mar Meridional de China. Estados Unidos, en el hemisferio occidental consagrado en el corolario a la doctrina Monroe de la reciente Estrategia de Seguridad Nacional y en los espacios críticos para su primacía global. La diferencia es que este reparto no se declara formalmente como en los viejos imperios, pero opera de hecho mediante presión militar, dependencia económica, coerción tecnológica, control de infraestructuras, alianzas de seguridad, sanciones, inversiones estratégicas y dominio de rutas.

El riesgo es evidente, pues si el orden internacional basado en reglas se transforma en una mera competencia entre grandes espacios, los Estados medianos y pequeños pierden margen de autonomía. El derecho deja de ser cobijo y resguardo para convertirse en lenguaje retórico. La soberanía formal permanece, pero queda condicionada por la geografía, la dependencia económica, la presión militar o la necesidad de protección. En ese mundo, los débiles se acomodan, los medianos maniobran y los grandes imponen. Tucídides lo expresó con crudeza cuando sentenciaba que «los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben». Hobbes lo tradujo en términos de miedo, autoayuda y alianzas de supervivencia.

Por eso la reforma de Naciones Unidas resulta cada vez más necesaria. El Consejo de Seguridad refleja todavía la distribución de poder de 1945, no la realidad del siglo XXI. Que India, el país más poblado del mundo y una de las grandes potencias emergentes, no tenga asiento permanente resulta difícilmente sostenible. Que

Brasil tampoco lo tenga revela la desconexión entre la arquitectura institucional vigente y la realidad geopolítica contemporánea. Lo mismo puede decirse de la infrarrepresentación africana, pese a que África será uno de los grandes centros demográficos y estratégicos del siglo XXI.

La reforma de Naciones Unidas no resolvería por sí sola la crisis del orden internacional, pero podría reducir su déficit de representatividad. Un Consejo de Seguridad más acorde con la distribución actual del poder reforzaría la legitimidad del sistema, aunque el problema del veto seguiría siendo central. Mientras las grandes potencias puedan bloquear cualquier decisión que afecte a sus intereses esenciales, la ONU continuará siendo limitada. Con todo, prescindir de ella sería aún peor, al suponer abandonar el único foro universal donde la comunidad internacional conserva una arquitectura común de deliberación y gestión de conflictos.

Europa debe encontrar su lugar en este nuevo mundo. Su dilema es profundo porque su proyecto político nació precisamente de la superación de la política de poder mediante la integración económica para domesticar la rivalidad entre Estados. Fue una extraordinaria operación kantiana de paz perpetua que descubre ahora que el mundo exterior no ha dejado de ser hobbesiano.

La respuesta europea a esta erosión del orden internacional no debería consistir en abandonar sus principios. Si Europa renuncia al derecho internacional, a los derechos humanos, al multilateralismo y a la limitación del poder por normas, pierde buena parte de su razón de ser. Pero tampoco puede seguir creyendo que los principios se sostienen solos. En un mundo de grandes espacios, rivalidad tecnológica, coerción económica y retorno de la fuerza, las normas necesitan capacidades en que la industria de defensa, autonomía tecnológica, seguridad energética, resiliencia civil, inteligencia estratégica, control de infraestructuras críticas y voluntad política se rinden fundamentales.

Europa debe seguir defendiendo el orden basado en reglas, pero entendiendo que ese orden sólo sobrevivirá si quienes creen en él son capaces de protegerlo. No se trata de autarquía ni de ruptura con Estados Unidos. La Alianza Atlántica seguirá siendo un marco esencial de seguridad, y Europa debería aspirar a ser su principal pilar europeo. Pero esa lealtad no puede confundirse con dependencia permanente. La autonomía estratégica significa disponer de capacidades suficientes para actuar cuando Washington mire hacia otro lado o cuando sus prioridades no coincidan plenamente con las europeas. Implica cooperar con Estados Unidos, dialogar con China sin ingenuidad, aproximarse al Sur Global sin paternalismo y contener a Rusia sin olvidar que la seguridad europea no puede descansar únicamente en la voluntad norteamericana.

Europa debe concebir la autonomía estratégica no como una alternativa a la OTAN, sino como la condición para que la Alianza sea más equilibrada, sólida y creíble. Para actuar como pilar europeo de la OTAN, necesita un conjunto completo de capacidades que le permita asumir responsabilidades reales en su propia seguridad y en su vecindad, corrigiendo las dependencias críticas que hoy limitan su margen de acción. Esta lógica alcanza también a la disuasión nuclear: si el paraguas estadounidense se percibe como menos automático o más condicionado por la política interna de EE. UU., Europa deberá plantearse cómo articular una disuasión nuclear propia y creíble, basada en Francia y, eventualmente, en el Reino Unido si decidiera volver a aproximarse a la UE en materia de seguridad tras el Brexit. No se trataría de sustituir de inmediato la garantía nuclear norteamericana, sino de evitar que Europa carezca de profundidad estratégica en el principal escalón de la disuasión.

España, dentro de esa Europa, también debe cultivar una cultura estratégica más madura. Su posición europea, atlántica,

mediterránea, africana e iberoamericana le otorga una singularidad que no puede desaprovechar. El estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo occidental, el Atlántico, Canarias, el Sahel, el norte de África, las rutas energéticas, los cables submarinos y la relación con América Latina son espacios donde el nuevo orden se traduce en intereses concretos. España debe seguir anclada en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica, pero sin confundir lealtad con automatismo ni alianza con subordinación.

El mundo que viene será previsiblemente menos universalista, más fragmentado y más transaccional. Las reglas seguirán existiendo, pero serán más disputadas. Las alianzas continuarán, aunque serán más exigentes. La globalización no desaparecerá, pero estará más securitizada. La cooperación seguirá siendo necesaria, pero convivirá con la desconfianza. Y el derecho internacional conservará su valor precisamente porque su alternativa es un mundo en el que sólo decide la fuerza.

La cuestión decisiva será evitar dos errores simétricos. El idealismo sin poder y el realismo sin legitimidad. El primero olvida que sin capacidades las normas se vacían. El segundo olvida que sin principios el poder se vuelve inestable. Europa, y con ella España, deberán aprender a moverse en el difícil equilibrio de defender las reglas y dotarse de capacidades, preservar los valores y entender los intereses, sostener el multilateralismo y exigir su reforma y, sobre todo, mantener la alianza atlántica y construir autonomía estratégica.

Rusia se presenta como potencia humillada que reclama reparación. China, como civilización-Estado que exige reconocimiento. Estados Unidos, aún en relativo declive, sigue siendo el actor indispensable contra el que los demás miden su ascenso y su autonomía. Las tres potencias, por motivos distintos y con responsabilidades muy diferentes, revisan el *statu quo*. El orden internacional no ha muerto, pero ha dejado de ser incuestionable.

La pregunta ya no es si volveremos al mundo liberal de los años noventa, sino si seremos capaces de evitar que el nuevo mundo de los intereses nacionales desemboque en una jungla hobbesiana sin reglas. Esa tarea no consiste en si Europa y España deberían romper con Estados Unidos, con quienes, como costilla escindida de nuestra civilización, compartimos valores y principios. Pero sí en aprender a ser aliada sin convertirse en vasalla. La crítica leal consiste en acompañar a Washington cuando defiende el orden basado en reglas y en señalar, con prudencia y claridad, cuándo sus actos contribuyen a erosionarlo. Sólo así Europa podrá seguir siendo fiel a lo que es, sin quedar inerme ante el mundo que viene.

G. V. B. N.